



# **DEMOCRACIA Y NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA**

# DEMOCRACIA Y NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA

Maximiliano Vandenberghe

## **Abstract:**

*El presente artículo analizará históricamente el neoliberalismo en Argentina y propondrá una mirada crítica sobre el rol de la democracia en dicho fenómeno. Este abordaje resulta sumamente significativo para la actualidad, dado que es protagonista de discusiones públicas y se corresponde con la coyuntura política y económica vigente. En consecuencia, comprender los efectos del neoliberalismo en el pasado brindará una perspectiva más compleja y rica de la experiencia presente, así como mayores herramientas para proyectar el futuro.*

**Palabras Clave:** Neoliberalismo – Democracia – Argentina – Deuda Externa – Privatizaciones – Crisis de Representatividad – Ajuste Económico

## ***La Génesis del Neoliberalismo en Argentina: Martínez de Hoz y El Proceso de Reorganización Nacional***

Si bien el Consenso de Washington marca los lineamientos básicos y fundamentales del neoliberalismo, la historia de este fenómeno en Argentina suele ubicarse unos años antes, con el comienzo del Proceso de Reorganización Nacional y la gestión de Martínez de Hoz como ministro de Economía. Proveniente de una familia de tradición oligárquica, el ministro estableció vínculos con el im-

perio norteamericano, siendo tan cercano a magnates como David Rockefeller, quien lo reconoció como un amigo íntimo. El perfil profesional y las relaciones personales de Martínez de Hoz sirven como prelude para comprender los giros que experimentó Argentina durante su gestión. En el marco de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, este acercamiento a los Estados Unidos implicó el asentamiento del imperialismo norteamericano en el país.

Galasso (2011) sostiene que el plan económico llevado a cabo por el ministro conllevó medidas como la derogación de la nacionalización de los depósitos bancarios; la eliminación de precios máximos; la modificación de tarifas de servicios; la liberación de tasas de interés y del tipo de cambio; la reducción notable de los aranceles de importación; y la prohibición del derecho a huelga, entre otras. Este conjunto de políticas evidencia el avance de la transnacionalización económica, el crecimiento de monopolios y oligopolios extranjeros en perjuicio de los productores locales, y el avance del capital sobre los derechos de los trabajadores. Entre los efectos inmediatos de estas medidas, se produjo un notable auge (*boom*) de las importaciones. La llegada masiva de productos foráneos provocó una considerable caída de la producción de las industrias nacionales y, por consiguiente, un crecimiento notable del desempleo. Otro punto relevante es que, dadas las políticas cambiarias, el país se encarecía, mientras que viajar al extranjero se hacía más accesible, lo que acarreó una gran pérdida para los sectores que dependían del turismo nacional. Mientras tanto, Argentina acrecentaba drásticamente su deuda externa.

Galasso (2011) afirma que:

Los indicadores económicos no dejan dudas respecto al carácter parasitario y elitista del modelo: la deuda externa bruta pasa de 9.738 millones de dólares en 1976 (...) a 19.034 en 1979, y la distribución del ingreso para los trabajadores decae notablemente de 38,8% en 1976 a

17,9% en 1978 (p. 513).

El neoliberalismo de la década de 1970 en Argentina propició el crecimiento de la deuda externa, un incremento de las importaciones en detrimento del desmantelamiento de la industria nacional, la caída de los salarios de los trabajadores y la consolidación de un modelo de especulación financiera, frustrando así el desarrollo industrial nacional.

En consecuencia, y en lo que respecta a la democracia sustantiva, la coyuntura neoliberal tuvo un impacto negativo, dado que facilitó la acumulación de capital, implicó desempleo, pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y generó ajuste y reducción del gasto público. Si bien unos pocos se enriquecieron, la mayoría resultó perjudicada.

Durante este período no se observó un Estado ausente, sino un Estado que seguía interviniendo, pero ya no en pos de políticas de pleno empleo, de una distribución justa de las ganancias ni en defensa de los intereses nacionales; por el contrario, facilitó la concentración de capital, empobreció a los trabajadores al otorgar libertades a la patronal, y promovió el enriquecimiento de empresas extranjeras en detrimento de la destrucción de las industrias locales, lo que redundó en desempleo y empobrecimiento generalizado.

Al poner en cuestión el impacto económico y social de la gestión de Martínez de Hoz como ministro de economía, uno podría preguntarse ¿Cómo fue posible? ¿Por qué el aparato político y sindical, o incluso la sociedad argentina en su conjunto no frenaron este modelo? Y aquí se encuentra un punto clave para comprender este fenómeno, no es casualidad que la llegada del neoliberalismo a la Argentina haya sido durante el Proceso de Reorganización Nacional, en el marco de un Terrorismo de Estado que exterminó a la militancia partidaria y sindical que, naturalmente, hubiese sido la que obstaculizaría, o incluso, impediría la aplicación de un modelo especulativo y elitista que venía a arrasar con los

logros de estos sectores.

Es decir, la llegada del neoliberalismo necesitó de un gobierno autoritario cómplice que discipline a los sectores sociales que se resistirían a este programa, llevando a cabo una violación sistemática de los Derechos Humanos de la población. Centrándonos en el concepto de democracia formal, el régimen violó la división de poderes, proscribió el sistema de partidos, suspendió los procesos electorales y criminalizó la libertad de expresión y toda manifestación popular. Por consiguiente, la primera experiencia neoliberal supuso una ruptura total con la democracia formal.

Si bien la Argentina ya venía atravesando un ciclo de extrema fragilidad del sistema democrático, con alternancias entre dictaduras y gobiernos semi-democráticos (concepto que empleamos dado que existían fuerzas políticas proscriptas y una constante tutela e intervención militar sobre los gobiernos), no se puede omitir que los impulsores de este modelo utilizaron —o incluso orquestaron— el Terrorismo de Estado. Esto ocurrió no solo para neutralizar a la disidencia política, sino también, para poder aplicar el programa neoliberal. En consecuencia, a la violación de la democracia formal, le siguió la degradación de la democracia sustantiva.

En relación con las dificultades que atraviesa la democracia argentina, Farres (2007) se centra en la cultura política de nuestra sociedad. El autor sostiene que en las décadas de 1950, 1960 y 1970, la tradición política excluyente —que lleva a entender la competencia política/electoral en términos de amigo-enemigo— se exacerbó por la constante intervención de las Fuerzas Armadas. Esta concepción resulta peligrosa, y obstaculiza la convivencia democrática que, llevada al extremo, puede tomar forma de discursos de odio que legitimen la eliminación de aquellos a quienes se instalan como enemigos. Este análisis es pertinente, pues los discursos de odio que reflejaban el antagonismo ideológico de

la Guerra Fría también sirvieron para sostener el programa neoliberal, criminalizando a la disidencia. Hoy también estamos frente a discursos oficialistas que se manejan con la misma lógica, teniendo como elemento central la demonización de partidos opositores, sindicalistas, movimientos sociales o incluso figuras públicas que se expresan contra el programa neoliberal, con la clara salvedad de que estamos en un Estado de derecho.

### ***El retorno a la democracia ¿Se come, se cura y se educa con el neoliberalismo?***

El fin de la dictadura cívico-militar trajo consigo una verdadera “primavera democrática”: la actividad política fue masiva, tanto en lo que respecta a las elecciones de 1983 como a los movimientos sociales que exigían justicia por lo acontecido durante el Proceso. La voluntad del gobierno de Alfonsín de llevar a juicio civil a los responsables del Terrorismo de Estado, su oratoria pacifista y la reivindicación de las banderas históricas del radicalismo, marcó el camino hacia la reconstrucción de consensos democráticos en la sociedad argentina. Los sectores de izquierda abandonaron las aspiraciones de liberación mediante el camino de la lucha armada y se sumaron a la oleada de paz y democracia. Si bien el juicio a la Junta trajo momentos de tensión, el fin de la dictadura dio inicio a un período donde la democracia formal volvió a establecerse. Como sostiene Fares (2007): “Existía una ilusión, y al mismo tiempo, una voluntad de expurgar todos los vestigios de autoritarismo de la dictadura militar, y recuperar el sentido original de la democracia: el de la libertad” (p. 371).

Lamentablemente, el retorno a la democracia no supuso el fin de los males desatados durante el Proceso, y las ilusiones que despertó se convirtieron rápidamente en decepciones. Faes (2007) sostiene que el Nunca Más se limitó al

cese de la persecución política, al no romper el pacto democrático y al eliminar la concepción del rival como enemigo ilegítimo. Sin embargo, otras formas de violencia se filtraron silenciosamente, principalmente la existencia de un Estado pasivo frente a la lógica del mercado, lo que legitimaba el abismo entre la realidad y un horizonte de equidad y justicia. El germen neoliberal ya se había instalado; la gigantesca deuda externa y el establecimiento de grupos de poder financiero en Argentina significarían desafíos mayúsculos para la gestión de Alfonsín.

Galasso (2011) sostiene que:

Alfonsín había prometido levantar la cortina de todas las fábricas, enjuiciar a los responsables de las torturas y muertes producidas durante la dictadura procesista, establecer plenamente el Estado de Derecho y en materia de deuda externa, diferenciar la legítima de la ilegítima, pagando solamente la primera de ellas (p.537).

Este programa implicaba hacer frente a las Fuerzas Armadas, a los consorcios financieros fortalecidos durante el Proceso, y a acreedores foráneos, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional. La herencia era sumamente desafiante, y el propio programa anunciado por el presidente radical ya evidenció su fracaso y la subsiguiente decepción generalizada.

Respecto a la cuestión militar, Alfonsín alcanzó el punto más alto de popularidad con el inicio del juicio a la Junta en 1985. Sin embargo, lo que constituía la gran victoria de su gobierno sufrió un revés con los levantamientos de Aldo Rico y, especialmente, con la sanción de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida. Estos hechos representaron una victoria significativa de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) sobre el gobierno radical, y provocaron enojo y frustración en la sociedad civil comprometida con las banderas de memoria, verdad y justicia.

Si el proceder del juicio a la junta culminó siendo un tema de desgaste del



gobierno de Alfonsín, ni que hablar de la economía, y es aquí donde retomamos el eje central de este trabajo.

Al inicio de su mandato, el Ministerio de Economía estuvo a cargo de Grinspun, quien, según Galasso (2011), expresaba los intereses de la pequeña y mediana industria, se mostraba crítico del neoliberalismo y se inclinaba a la protección de los intereses nacionales y al sofocamiento de la especulación financiera. El breve lapso de su gestión evidencia el poder que los intereses foráneos habían adquirido en Argentina. Las negociaciones con el Fondo fueron difíciles: Grinspun no aceptaba los intereses de deuda, a los cuales consideraba injustos e ilegítimos.

De hecho, el gobierno llevó a cabo una investigación de las condiciones de deuda tomadas con el Fondo durante el proceso, donde fue investigado incluso el hijo del ex ministro Martínez de Hoz, quien intentó escapar con valijas llenas de documentación que demostraban conspiraciones económicas entre el gobierno nacional y bancos acreedores. Aunque Alfonsín tuvo la oportunidad de desconocer la deuda externa (o parte de ella) debido a sus condiciones ilegítimas, el propio entorno del expresidente reconoció que continuar por esa vía era incompatible con el programa de gobierno. Grinspun comenzó a recibir “malas caras” de la “patria financiera”, la cual insistió ante el gobierno para remover al ministro, dado que lo consideraba un estorbo para la concreción de sus intereses. El intento inicial del gobierno de Alfonsín de oponerse a la corriente neoliberal fracasó; a fines de 1984, el presidente anticipó un cambio de rumbo en la economía, anunciando que el nuevo sendero sería aumentar las exportaciones y fomentar la inversión privada.

En febrero de 1985, asumió como ministro de Economía Sourrouille. La nueva política económica se centró en la reducción del gasto público, el aumento de impuestos, el apoyo crediticio al sector rural y el fomento de la inversión



extranjera.

A partir de aquí, podríamos decir que el gobierno se alineó con la agenda del Fondo Monetario Internacional, tomando la senda opuesta a lo que se propuso originalmente con Grinspun. Esto provocó decepción y desesperanza en quienes, hasta entonces, veían en Alfonsín una concreción de institucionalidad, justicia y equidad. Sourrouille llevó a cabo el Plan Austral, el cual fue aceptado por el FMI, aunque con ciertos “retoques”, como el alza de tarifas y precios, y el estancamiento de los salarios. El gobierno intentó defender el plan argumentando que es necesario del mismo para frenar la inflación. Si bien esta descendió durante los primeros meses, el déficit fiscal, la persistencia del endeudamiento (externo e interno) y los escasos ingresos fiscales provocaron la reanudación del proceso inflacionario. Para 1988, la situación era drástica, la política de endeudamiento se hizo insostenible y el gobierno suspendió el pago a los bancos acreedores. Ese año se lanzó el “Plan Primavera”, que buscó detener la inflación, pero atentó contra la industria nacional al facilitar el ingreso de productos foráneos. En la actualidad, el enorme problema de la deuda sigue presente y no hace más que empeorar.

A comienzos de 1989, el gobierno llevó a cabo una devaluación monetaria, que provocó saltos vertiginosos en la relación del austral con el dólar en tan solo semanas. La inflación se convirtió en “hiperinflación”. Mientras que los grandes grupos financieros se negaron a colaborar, el país atravesó días de saqueos y represión, la situación desbordó al presidente, quien adelantó las elecciones para mayo de 1989.

El gobierno que tanta esperanza e ilusión despertó, fracasó rotundamente. La batalla que lo llevó a su momento de mayor apoyo y popularidad, el Juicio a las Juntas, sufrió una gran derrota con la Ley de Obediencia Debida. Aquella célebre frase que decía que “con la democracia se come, se cura y se educa” no

pudo concretarse con la alarmante situación económica y social que caracterizó a la gestión.

El daño de los militares había sido enorme para la gestión de Alfonsín, no solo por la decepción que significó la resolución del Juicio a las Juntas, sino por la catástrofe económica que ocasionaron. El germen neoliberal creció, y se comió al gobierno del expresidente radical, que no logró mantenerse firme contra los consorcios financieros que comenzaron a manejar los hilos de la Argentina. La salida de Grinszpun del Ministerio de Economía fue un síntoma de debilidad y falta de rumbo en el gobierno; también fue la jugada que el FMI y las grandes corporaciones financieras e industriales foráneas necesitaron para continuar y profundizar el modelo neoliberal en la Argentina. ¿El resultado? El menemismo.

### ***El menemismo: la estafa electoral y el neoliberalismo salvaje***

La asunción de Carlos Menem como presidente de la nación argentina, implicó la adopción formal y absoluta de la Argentina al programa neoliberal, que ya se definía con el Consenso de Washington.

Lo que la sociedad argentina llamó posteriormente “la traición” de Menem, implica realizar una revisión de lo que representaba el riojano antes de la presidencia, y luego qué hizo con ella. Militante, peronista desde joven, candidato a diputado y a senador por su provincia, gobernador riojano, preso político durante la dictadura y luego reelegido como líder de su provincia; Menem se presentaba como el nuevo Facundo Quiroga, representante del federalismo, con un perfil antiliberal, tacto con los sectores populares, y también con mucho encanto personal, que le otorgaba facilidad para relacionarse con celebridades, grandes empresarios y políticos de carrera. Fares (2007) describe que “La campaña de Menem se había desarrollado con un tono caudillesco, capitalizando su origen riojano y su imagen facundina, que retomaba aspectos fundamentales de

la identidad peronista” (p.379).

El fracaso del gobierno de Alfonsín y el creciente caos económico y social adelantaron su asunción, asumiendo en julio del 89 la presidencia de la nación argentina.

Menem había prometido una “revolución productiva y un salariazó”, dicha consigna resultó ser la antítesis de la línea que tomaría inmediatamente su gobierno. ¿Cómo el caudillo riojano, cuya vida está atravesada por la militancia en el justicialismo, pudo abandonar la doctrina que defendió hasta el momento de sentarse en el sillón de Rivadavia y adoptar la agenda del imperialismo norteamericano y las nuevas oligarquías transnacionales? Galasso (2011) responde que hay que partir de la comprensión del peronismo como un movimiento policlasista con conducción bonapartista. El arbitraje de los conflictos entre los sectores que lo componen se licuan en un liderazgo, el de Perón.

Tras su muerte, se desató una lucha interna. La década de 1970 provocó que gran parte del empresariado, antes dedicado al mercado interno, se transnacionalizara, buscando al capital extranjero como socio e incluso dedicándose al mercado externo. Este fenómeno provocó que parte de esa burguesía industrial nacional, que componía el movimiento, mutara, haciendo que sea imposible esa comunidad organizada que anhelaba Perón. Este nuevo empresariado logró imponerse en el justicialismo, lo que demuestra que el neoliberalismo se filtró incluso en el movimiento político más popular de la Argentina. Adjudicar a Menem la culpa exclusiva de lo que realizó en sus gobiernos resulta una mirada simplista: fue gran parte del justicialismo el que cayó ante las tentaciones del *establishment*. Por convicción o inercia, el grueso del partido apoyó al presidente riojano y a los lineamientos políticos e ideológicos de sus gobiernos.

Durante este período, no solo se profundizaron las medidas económicas neoliberales iniciadas con Martínez de Hoz, sino que incluso la sociedad argen-

tina se vio cada vez más expuesta y cautivada por los papelitos de colores del primer mundo. La extravagancia, la opulencia y la frivolidad van a ser los rasgos distintivos de la política y de la cultura de los años noventa.

Galasso (2011) toma como elemento de análisis las memorias de Franco Macri para entender la relación de Menem con los grupos económicos concentrados de la Argentina. El empresario reconoce haber tenido, junto a su grupo de socios/amigos, influencia directa en la designación de ministros de Economía y los hombres de confianza del presidente, como Roig, Rapanelli y, posteriormente, Cavallo. La apertura y flexibilidad de Menem con los consorcios, le dieron su confianza y apoyo.

La política económica menemista comenzó con la Ley de Reforma del Estado, que apuntó a facilitar las privatizaciones, y la Ley de Emergencia Económica, la cual provocó la suspensión de subsidios y la liberalización de las inversiones extranjeras. La intención del gobierno era clara: lograr mayor equilibrio fiscal eliminando gastos del Estado y obteniendo fondos de la venta de empresas estatales.

La lista de empresas del Estado que se privatizaron es larga: en 1990, el Estado se deshizo de Aerolíneas Argentinas y ENTEL; se concesionaron miles de kilómetros de rutas nacionales, que pasaron a cobrar peaje; se desarticuló el sistema ferroviario, privatizando los ramales más rentables y ocasionando miles de despidos; y se disolvió la flota mercante, conocida tiempo atrás como una de las más importantes del mundo. En 1992 se privatizó Gas del Estado, incluso cuando generaba ganancias; ese mismo año lo mismo sucede con YPF, que fue vendida a un precio mucho menor que el que correspondía, y correo, que quedó en manos del grupo Macri. Estos procesos de privatización estuvieron plagados de casos de corrupción. Galasso (2011) concluye lo siguiente: “En esa primera época del gobierno ya se percibe que una banda se ha apoderado del Estado y

lucra desde las altas esferas, mientras Menem juega al fútbol, baila con una odalisca o bromea, con exultante cinismo (...)” (p.559).

La política económica de Cavallo continuó con las privatizaciones, pero incorporó la Ley de la Convertibilidad, la cual establecía paridad cambiaria con el dólar, con el objetivo de estabilizar los precios y frenar la inflación. A corto plazo, el gobierno logró este objetivo, si bien en detrimento del crecimiento de la deuda externa, la aceleración de las privatizaciones y el disciplinamiento del sector privado interno. A este último, le resultó cada vez más difícil competir con la marea de importaciones, lo que conllevó a un aumento del desempleo y de la pobreza. De todos modos, el estancamiento de la inflación provocó cierta sensación de estabilidad en los argentinos, permitiendo que la sociedad argentina hiciera caso omiso a la escandalosa corrupción e impunidad que habitaba “la rosada”. Incluso le darían la reelección al presidente riojano, que, de Facundo, ya no tenía absolutamente nada más que las patillas.

Durante los primeros años del menemismo, ya resultaba evidente el aumento del desempleo, fruto de las privatizaciones y de las dificultades del sector privado para competir con las importaciones. La brecha entre ricos, la clase media y baja se ensanchaba cada vez más. La burguesía transnacional que ahora dirigía el partido justicialista pisoteaba las bases del peronismo originario: los trabajadores.

Más que una comunidad organizada, el menemismo fue una élite organizada para los negocios de las nuevas oligarquías transnacionales, subordinada al “imperio del norte”, que destruyó lo que quedaba de la estructura estatal y productiva de la Argentina de Perón. Para los años 1993 y 1994, ya se registraban las primeras manifestaciones y revueltas contra el gobierno nacional.

Si bien el primer gobierno de Menem había logrado una estabilidad frágil al desacelerar significativamente la inflación, apoyándose en la indiscriminada

privatización, el recorte del gasto público, el disciplinamiento laboral y la profundización del endeudamiento externo, su segundo mandato empezó a demostrar los límites y las repercusiones de dicho programa. Una vez que el grueso de las empresas habían sido privatizadas, el gobierno ya no contó con esos ingresos y recurrió al ajuste en la administración central, lo que no hizo más que empeorar la creciente tasa de desempleo, que pasó de 9,9% en 1993 a 18,4% en 1995.

La flexibilización laboral y el crecimiento de la desocupación y el desempleo provocaron que, durante el comienzo de su segundo mandato –cuando Menem creía que se había consolidado como el líder del justicialismo–, las fracturas en el movimiento. No solo Duhalde y legisladores justicialistas intentaron desprenderse del presidente y de la impronta neoliberal (percibida ya como la causante del desastre), sino también líderes sindicales colaboracionistas del gobierno reconocen haberse equivocado y estar arrepentidos. Mientras que los sectores que desde el inicio se opusieron al programa menemista-camioneros, UTA y CTA intensificaron la agenda de lucha, logrando durante 1996 paros generales con alto acatamiento. Ese mismo año, Cavallo fue removido del Ministerio de Economía.

Hacia finales de los noventa, el derrumbe del gobierno era inminente, la deuda externa había llegado a niveles inauditos, el desempleo se había multiplicado, la pobreza había crecido y la imagen del gobierno se ha deteriorado frente a la creciente aparición de casos de corrupción, tales como las coimas y los sobrepagos por el contrato entre IBM y Banco Nación para informatizar el sistema financiero y la venta ilegal de armas, por nombrar algunos de los casos más populares.

Galasso (2011) expresa:

La década menemista ha llegado a su fin. Deja varios saldos: una reducida parte de la sociedad argentina se considera en el Primer Mun-

do porque utiliza telefonía celular, viaja al exterior o navega en Internet, mientras 14 millones de argentinos viven por debajo de la línea de pobreza, y más de 3 millones en la indigencia (p.572).

Los consorcios financieros extranjeros, sobre todo de origen norteamericano, encontraron en Menem y su entorno a un grupo de políticos y empresarios dispuestos a abrirle las puertas a sus ambiciones más rapaces.

El programa menemista puede resumirse en una apertura indiscriminada de las importaciones; crecimiento de la deuda externa, acompañado de negociaciones turbias que se realizaron con la misma; concesiones y facilidades a las inversiones extranjeras; privatización generalizada de empresas estatales en condiciones dignas de concebirse como estafas y flexibilización laboral. ¿El resultado? Un brutal crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, se multiplicó el desempleo; creció la pobreza, la indigencia y el empleo no registrado. Además, el Estado se replegó de responsabilidades que históricamente le fueron propias, como educación y salud, ocasionando un deterioro en ambos sistemas. Se generalizó una sensación –fundada– de corrupción e impunidad jurídica en las altas esferas de la política, lo que provocó una crisis de legitimidad, basada en la escasa credibilidad de los funcionarios públicos y en la catástrofes económicas y sociales causadas por los últimos gobiernos.

### ***De la Alianza al “que se vayan todos”***

La creación de la Alianza y su llegada al poder respondieron al fuerte rechazo que amplios sectores de la sociedad argentina generaron hacia el menemismo. Sin embargo, cabe mencionar que no estaba clara la conformación de un proyecto económico alternativo en el nuevo espacio gobernante. La Alianza resultó de la unión del FREPASO y el Radicalismo, que postuló a uno de sus hombres de la derecha conservadora, Fernando de la Rúa, como candidato presiden-



cial. Aunque existían diferencias entre los integrantes de esta coalición, todos coincidían en el fuerte rechazo hacia el menemismo. No obstante, todos tenían los mismos motivos, y estas diferencias se harían evidentes cuando el gobierno mantuviera la política económica neoliberal y provocara quiebres con integrantes del FREPASO.

El nuevo gobierno intentó diferenciarse del menemismo en las formas, dejando atrás la mafia y el circo menemista, pero no hubo ningún giro en el rumbo económico. Galasso (2011) lo resume de esta manera:

*Los poderosos consorcios surgidos de la dictadura genocida estaban en el poder, financiaban las campañas de los grandes partidos tradicionales y continuarían la misma política, arrojando al presidente saliente como limón exprimido, para lo cual rodearían cariñosamente al nuevo, quien seguramente procedería también a obedecer, pero guardando modales y formas más presentables (p.576).*

El gobierno de la Alianza no demoró en dejar en claro que no había ninguna vocación transformadora, por el contrario, se caracterizó por un marcado conservadurismo, que implicó una fiel continuidad del modelo económico neoliberal. Ante las protestas por el creciente malestar social, la respuesta inmediata fue una feroz represión.

El primer punto de conflicto fue el intento del gobierno de sancionar una nueva ley laboral que profundizara la flexibilización laboral. Esto se debía a que era uno de los puntos señalados por el Fondo Monetario Internacional para seguir desembolsando créditos, lo que acrecentaba una deuda externa que se hacía cada vez más insostenible en un contexto de recesión. La aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados generó la reacción de la CGT y la CTA, que respondieron con paros generales con gran adhesión de los trabajadores. La posterior aprobación de la ley en la cámara de senadores, provocó un gran daño

al gobierno de la Alianza, dado a que comienza a rumorear sobre la existencia de sobornos en el Senado. Si el presidente radical se jactaba de terminar con la corrupción menemista, este hecho lo dejó muy mal parado frente a una sociedad cada vez más escéptica y descreída.

Fernando de la Rúa continuó con la línea del programa del FMI, rebajando sueldos de empleados estatales y de seguridad. En marzo de 2001, designó como ministro a López Murphy, considerado un “liberal duro”, cuyo eje de gestión sería la continuidad de la política de ajuste. Su primer ataque fue contra el presupuesto educativo, generando la reacción de profesores y estudiantes, que volcaron sus reclamos en las calles. El malestar social y la acción sindical llevaron al ministro a renunciar a los pocos meses.

Si la “falta de luces” en el nuevo gobierno aún no era clara, la elección de Cavallo como ministro de economía no hizo más que ilustrar la continuidad del modelo menemista y el fracaso de la Alianza. Continuando con la política de ajuste, el ministro dio un manotazo de ahogado con el “Megacanje”, una refinanciación de los bonos deudas que implicó enormes perjuicios a mediano y largo plazo. El fracaso de la Alianza en las elecciones legislativas y los índices oficiales de desempleo dieron cuenta de que el gobierno estaba terminado.

Faes (2007) explica que “El programa de la Alianza no contaba con que la crisis de las economías emergentes no eran una cuestión coyuntural, sino que su prolongación constituiría un callejón sin salida para el gobierno” (p.387). A mediados del 2001, la fuga de divisas y el retiro de depósitos pusieron en riesgo al sistema bancario. En noviembre del mismo año, Cavallo aplicó el famoso “Corralito”, limitando las extracciones semanales de los bancos. Podríamos decir que esta medida fue la gota que rebalsó el vaso, la clase media salió a las calles reclamando por sus ahorros, dándole origen a las jornadas conocidas como “el cacerolazo”.

El FMI y otros acreedores dejaron solo al frágil gobierno de la alianza, se negaron a dar nuevos desembolsos. Se contaba que las condiciones para los mismos implican continuar con el ajuste, recortando aguinaldo y sueldos públicos. Continuaron los paros generales y el estallido social se avecinaba. A partir del 15 de diciembre del mismo año, comenzaron los saqueos en el país. El 19 de diciembre, el presidente, que se había vendido como garante de la institucionalidad, declaró el estado de sitio. Este hecho detonó la paciencia de los argentinos, que inmediatamente respondieron con un cacerolazo masivo concentrado en Plaza de Mayo. A la renuncia del ministro Cavallo, siguió la huida del presidente en un helicóptero que aterrizó en la Casa Rosada, mientras en las manifestaciones sonaba un cántico que decía: "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Las décadas de neoliberalismo en la Argentina condujeron a una profunda crisis económica, política y social que puso en riesgo, nuevamente, al sistema democrático mismo, generando una grave crisis de representatividad y legitimidad, y un estallido social que dejó decenas de muertos en el país.

### ***Reflexiones finales***

Las últimas décadas del siglo XX en Argentina fueron testigo de profundas transformaciones, económicas, sociales y culturales. El Proceso de Reorganización Nacional no solo se cobró a los treinta mil desaparecidos, sino que nos dejó el aparato productivo destruido, una gigantesca deuda externa, una tendencia creciente de desempleo y pobreza, y consorcios financieros e industriales transnacionales que adquirieron el poder suficiente para incidir directamente en las decisiones de gobierno.

Las décadas de 1980 y 1990 demostraron que el retorno a la democracia despertó tantas ilusiones, como luego, decepciones. La democracia política no

pudo corresponderse con estándares mínimos de equidad y justicia. El programa neoliberal desgarró a la sociedad argentina: provocó daños estructurales en las esferas económicas y sociales, como el desempleo y la pobreza estructural, el ensanchamiento de la brecha entre los que más tienen y el resto de la sociedad, y la vulgarización de la política, generando mayor escepticismo y rechazo de gran parte de la sociedad hacia los asuntos públicos. Estos daños representan un duro golpe para la democracia, que no solo se sirve de ciudadanos que asisten a los comicios, sino que se realiza y consolida cuando todos los sectores sociales tienen voz y logran que sus intereses sean representados. Durante las décadas neoliberales, fue avasallante la hegemonía de un pequeño grupo de empresarios, extranjeros y locales, cuyos intereses se volcaron en los programas oficiales de los gobiernos de estos períodos, que serviles y cómplices, los ejecutaron a costa del perjuicio de las mayorías. Una sociedad democrática no puede desentenderse del concepto de bien común, y el neoliberalismo constituyó un verdadero atentado contra dicho valor.

¿Puede el programa neoliberal ejecutarse en un marco democrático? La revisión histórica realizada en el presente artículo nos permite establecer una serie de puntos al respecto. En primer lugar, este modelo se inició en el marco de una dictadura, es decir, no fue un programa elegido por la población. Si bien se consolidó con gobiernos que llegaron mediante el voto popular, estos prometieron abandonar la receta neoliberal, como se vio en las promesas de campaña de Alfonsín y, sobre todo, en el primer gobierno de Menem. Por lo tanto, incluso en los gobiernos que asumen democráticamente, la voluntad popular no optó por dicho modelo. En el caso de Alfonsín, su gobierno no tuvo la fuerza o la voluntad para sostener un modelo de crecimiento de la industria nacional y expansión del consumo, y terminó cediendo a los intereses de los grandes consorcios; en el caso de Menem, se trató de una verdadera estafa electoral. Por lo tanto, en términos de representatividad, las casi tres décadas de

neoliberalismo no se constituyeron mediante la voluntad popular, sino mediante el autoritarismo, el debilitamiento institucional y las promesas incumplidas.

En segundo lugar, si volvemos a la célebre frase del expresidente radical “con la democracia se come, se cura y se educa”, que sintetiza los valores que el mundo occidental le ha otorgado a las democracias desde la segunda mitad del siglo XX, el neoliberalismo no ha sido más que una catástrofe para estos ideales. El brutal crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, así como la pérdida de la calidad de la educación y la salud pública, fruto de su desfinanciamiento, y el morbosos crecimiento de la concentración del capital en grupos económicos que se enriquecieron a costa del deterioro del nivel de vida de las mayorías, dan cuenta que el programa neoliberal escupe sobre los conceptos de equidad y justicia. Por lo tanto, la historia argentina da cuentas de que este modelo debilita a la democracia. Si bien el presenta da cuentas de que la sociedad argentina ha optado nuevamente por este modelo, las consecuencias de su implementación las hemos experimentado durante las décadas analizadas, y comenzamos a percibir las nuevamente desde la presidencia de Mauricio Macri y el retorno al FMI, el descalabre financiero, la crisis del sector productivo local y el aumento de la pobreza.

Si bien este modelo puede funcionar bajo ciertos parámetros institucionales, limitando la idea de democracia a la formalidad institucional, inevitablemente va contra los conceptos de democracia económica y social, dado a que no considera, y de hecho atenta, contra el bien común, al ni siquiera garantizar el cumplimiento de derechos básicos para vastos sectores de la población, y Argentina, es tan sólo uno de los escenarios que dan cuenta de ello.

## **Bibliografía**

Fares, María Celina, *Instituciones y cultura política. Un ensayo sobre las dificultades de la democracia en Argentina*, en la Universidad Nacional de Cuyo, 2007.

Galasso, Norberto, *Historia de la Argentina: desde los pueblos originarios hasta los Kirchner. Tomo II*, en Bs As, ed Colihue, 2011.